

Conxa Garcia Ferrer

*Diputada delegada d'Assessorament Municipal,
Assistència, Defensa en Judici i Plans d'Ocupació*



AJUNTAMENT DE BURJASSOT



ENTRADA-2016011888/1
04/07/2016 09:22

València, 29 de juny 2016

Sr. Alcalde/Sra. Alcaldessa,

La Diputació de València, en el Ple celebrat el dia 28 de juny de 2016, ha aprovat per unanimitat de tots els assistents, la moció referent al règim de cotització dels professionals que presten servicis en municipis xicotets (de menys de 5.000 habitants), basant-se en els convenis de la Diputació amb els Col·legis Professionals.

Per tot això se li adjunta la mateixa, perquè es prenga en consideració sotmetre-la al Ple de la seua corporació per ser d'interés per a tots els municipis afectats.

Una salutació.

Conxa Garcia Ferrer.

**Diputada-Delegada d' Assessorament Municipal
Assistència, Defensa en Judici i de Plans d' Ocupació**

Valencia ,29 de junio de 2016

Sr. Alcalde/ Sra. Alcaldesa,

La Diputación de Valencia, en el Pleno celebrado el día 28 de junio de 2016, ha aprobado por unanimidad de todos los asistentes, la moción referente al régimen de cotización de los profesionales que prestan servicios en municipios pequeños (de menos de 5.000 habitantes), en base a los convenios de la Diputación con los Colegios Profesionales.

Por todo ello se le adjunta la misma, para que se tome en consideración someterla al Pleno de su corporación por ser de interés para todos los municipios afectados.

Un saludo.

Conxa Garcia Ferrer.

**Diputada-Delegada de Asesoramiento Municipal
Asistencia, Defensa en Juicio y Planes de Ocupación**

Conxa Garcia Ferrer

*Diputada delegada d'Assessorament Municipal,
Assistència, Defensa en Judici i Plans d'Ocupació*

MOCIÓ DE LA DIPUTADA DELEGADA DE ASESORAMIENTO MUNICIPAL, ASISTENCIA, DEFENSA EN JUICIO Y PLANES DE EMPLEO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace 30 años, la Diputación de Valencia, al igual que alguna otra diputación, está firmando convenios de colaboración con los Colegios Profesionales para prestar servicios en los pequeños Ayuntamientos de la Provincia, aquellos de menos de 5.000 habitantes, que no se pueden permitir tener en sus plantillas Ingenieros Industriales, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros Técnicos Industriales, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Técnicos Agrícolas, Ingenieros de Montes, Ingenieros Técnicos Forestales, Ingenieros Técnicos en Topografía, Graduados Sociales, Ingenieros de Telecomunicación, Biólogos, Ambientólogos o Arqueólogos.

La Diputación ha venido financiando, junto con los Colegios Profesionales, los honorarios de estos profesionales liberales, honorarios que estos cobraban por la emisión de las correspondientes facturas con la detracción del IVA aplicable, constituyendo sin lugar a dudas, una retribución de carácter mercantil.

Las dos únicas sentencias que se han pronunciado sobre tales situaciones; las SSTSTJ Comunidad Valenciana Nº 1837/2009 de 2 de junio de 2009 y la Nº 12/2010 de 12 de enero de 2010; dictadas a instancia de la Inspección de Trabajo, han venido a confirmar que el régimen de cotización adecuado para estos profesionales es el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y no el Régimen General como defiende la Inspección, puesto que en las relaciones existentes entre estos técnicos y los Ayuntamientos empleadores no se dan las notas de ajenidad y dependencia características de una relación laboral.

Desde estos pronunciamientos del TSJ Comunitat Valenciana no ha habido nueva jurisprudencia que analice casos idénticos ni modificaciones normativas que hayan producido cambio alguno en el marco legal en el que nos movemos. Esto es así, dado que las sentencias de casación aportadas por la Inspección como argumentación contraria no analizan situaciones semejantes, dado que en ellas, el profesional prestaba sus servicios integrado en la organización empresarial disfrutando de vacaciones retribuidas, cumpliendo el mismo horario que el personal funcionario y llegando a percibir sus retribuciones en concepto de nóminas. Entendemos pues que, el criterio seguido por el TS en estas sentencias no es de aplicación a los casos que se dan en los Ayuntamientos de la Provincia de Valencia en los que el profesional presta sus servicios por unas jornadas semanales de como máximo 4 horas, no disfrutando de vacaciones retribuidas y pudiendo realizar sus labores desde su despacho profesional.

La reconversión de estos trabajadores autónomos en trabajadores laborales de las Corporaciones acarrearía incontables perjuicios tanto para los Ayuntamientos como para los profesionales. Por una parte, los primeros no podrían asumir el coste que supone incorporar a su plantilla a estos trabajadores además de los inconvenientes que a este respecto plantea la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por otra, los profesionales que serían dados de alta en los Ayuntamientos por 2 o 4 horas semanales no podrían prestar servicios en más de dos Corporaciones, no podrían realizar otros trabajos para dichas Entidades Locales y deberían solicitar a éstas el consentimiento para realizar trabajos para particulares, todo esto debido a la Ley de incompatibilidades. Esto puede llevar a la más que probable situación de que sea el propio profesional el que, ante este panorama decline ser contratado por la Administración. En ese caso llegaríamos a la pregunta inevitable de qué sucedería con las Corporaciones con menos recursos, y cómo podrían éstas atender a los servicios que por Ley deben proporcionar.

La Diputación de Valencia quiere mostrar su total disposición a iniciar un proceso de diálogo y negociación con la Inspección de Trabajo, con la intención de buscar las fórmulas más

Conxa Garcia Ferrer

*Diputada delegada d'Assessorament Municipal,
Assistència, Defensa en Judici i Plans d'Ocupació*

adecuadas para seguir prestando el servicio sin el riesgo de que se produzcan nuevas inspecciones.

En caso de que la Diputación diera por bueno el criterio de Inspección de Trabajo, los Ayuntamientos se verían obligados a contratar directamente a estos técnicos, lo que **incumpliría la prohibición del Gobierno central de aumentar la masa salarial** que las administraciones públicas deben destinar al capítulo de Personal. Por tanto, se produciría la paradoja de que la Delegación del Gobierno tendría que impugnar ante los tribunales las consecuencias de una medida tomada por la Inspección de Trabajo del propio Gobierno.

Ante el gran perjuicio que con esta actitud indiscriminada de la Inspección de Trabajo se causaría a los Ayuntamientos de menor capacidad económica y de gestión, aquellos con una población inferior a los 5.000 habitantes, se propone la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

1. Se reconsidere esta actitud contra los pequeños Ayuntamientos de la Provincia de Valencia por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y se tenga en cuenta la buena fe, el cumplimiento de la legalidad y el sometimiento a la jurisprudencia aplicable, y en razón de todo ello se archiven los expedientes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
2. Que se envíe esta moción al Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y al Ministerio de Trabajo del Gobierno de España.
3. Que se dé traslado de este acuerdo a todos los Ayuntamientos de la Provincia.

Conxa Garcia Ferrer.

**Diputada-Delegada de Asesoramiento Municipal
Asistencia, Defensa en Juicio y Planes de Ocupación**

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Conxa Garcia Ferrer

*Diputada delegada d'Assessorament Municipal,
Assistència, Defensa en Judici i Plans d'Ocupació*

MOCIÓ DE LA DIPUTADA DELEGADA D'ASSESSORAMENT MUNICIPAL, ASSISTÈNCIA, DEFENSA EN JUDICI I PLANS D'OCUPACIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de fa 30 anys, la Diputació de València, igual que alguna altra diputació, està firmant convenis de col·laboració amb els Col·legis Professionals per a prestar servicis en els xicotets Ajuntaments de la Província, aquells de menys de 5.000 habitants, que no es poden permetre tindre en les seues plantilles Enginyers Industrials, Enginyers de Camins, Canals i Ports, Arquitectes, Arquitectes Tècnics, Enginyers Tècnics d'Obres Públiques, Enginyers Tècnics Industrials, Enginyers Agrònoms, Enginyers Tècnics Agrícoles, Enginyers de Montes, Enginyers Tècnics Forestals, Enginyers Tècnics en Topografia, Graduats Socials, Enginyers de Telecomunicació, Biòlegs, Ambientòlegs o Arqueòlegs.

La Diputació ha finançat, junt amb els Col·legis Professionals, els honoraris d'estos professionals liberals, honoraris que estos cobraven per l'emissió de les corresponents factures amb la detracció de l'IVA aplicable, constituint sense cap dubte, una retribució de caràcter mercantil.

Les dos úniques sentències que s'han pronunciat sobre tals situacions; les SSTSTJ Comunitat Valenciana NÚM. 1837/2009 de 2 de juny de 2009 i la NÚM. 12/2010 de 12 de gener de 2010; dictades a instància de la Inspecció de Treball, han vingut a confirmar que el règim de cotització adequat per a estos professionals és el Règim Especial de Treballadors Autònoms i no el Règim General com defén la Inspecció, ja que en les relacions existents entre estos tècnics i els Ajuntaments ocupadors no es donen les notes d'ajenidad i dependència característiques d'una relació laboral.

Des d'estos pronunciaments del TSJ Comunitat Valenciana no hi ha hagut nova jurisprudència que analitze casos idèntics ni modificacions normatives que hagen produït cap canvi en el marc legal en què ens movem. Açò és així, atés que les sentències de cassació aportades per la Inspecció com a argumentació contrària no analitzen situacions semblants, atés que en elles, el professional prestava els seus servicis integrat en l'organització empresarial disfrutant de vacances retribuïdes, complint el mateix horari que el personal funcionari i arribant a percebre les seues retribucions en concepte de nòmines. Entenem perquè que, el criteri seguit pel TS en estes sentències no és d'aplicació als casos que es donen en els Ajuntaments de la Província de València en els que el professional presta els seus servicis per unes jornades setmanals de com a màxim 4 hores, no disfrutant de vacances retribuïdes i podent realitzar les seues labors des del seu despatx professional.

La reconversió d'estos treballadors autònoms en treballadors laborals de les Corporacions ocasionaria inenarrables perjuís tant per als Ajuntaments com per als professionals. D'una banda, els primers no podrien assumir el cost que suposa incorporar a la seua plantilla a estos treballadors a més dels inconvenients que respecte d'això planteja la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, d'una altra, els professionals que serien donats d'alta en els Ajuntaments per 2 o 4 hores setmanals no podrien prestar servicis en més de dos Corporacions, no podrien realitzar altres treballs per a les dites Entitats Locals i haurien de sol·licitar a estes el consentiment per a realitzar treballs per a particulars, tot açò a causa de la Llei d'incompatibilitats. Açò pot portar a la més que probable situació que siga el propi professional el que, davant d'este panorama decline ser contractat per l'Administració. En eixe cas arribariem a la pregunta inevitable de què succeiria amb les Corporacions amb menys recursos, i com podrien estes atendre als servicis que per Llei han de proporcionar.

La Diputació de València vol mostrar la seua total disposició a iniciar un procés de diàleg i negociació amb la Inspecció de Treball, amb la intenció de buscar les fórmules

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Conxa Garcia Ferrer

*Diputada delegada d'Assessorament Municipal,
Assistència, Defensa en Judici i Plans d'Ocupació*

més adequades per a continuar prestant el servici sense el risc que es produïsquen noves inspeccions.

En el cas que la Diputació donara per bo el criteri d'Inspecció de Treball, els Ajuntaments es veurien obligats a contractar directament estos tècnics, la qual cosa incumpliria la prohibició del Govern Central d'augmentar la massa salarial que les administracions públiques han de destinar al capítol de Personal. Per tant, es produiria la paradoxa que la Delegació del Govern hauria d'impugnar davant dels tribunals les conseqüències d'una mesura presa per la Inspecció de Treball del propi Govern.

Davant del gran perjudí que amb esta actitud indiscriminada de la Inspecció de Treball es causaria als Ajuntaments de menor capacitat econòmica i de gestió, aquells amb una població inferior als 5.000 habitants, es proposa la següent

PROPOSTA D'ACORD

1. Es reconsidere esta actitud contra els xicotets Ajuntaments de la Província de València per part del Ministeri de Treball i Seguretat Social i es tinga en compte la bona fe, el compliment de la legalitat i el sotmetiment a la jurisprudència aplicable, i quant a tot això s'arxivien els expedients de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
2. Que s'envie esta moció al Delegat del Govern a la Comunitat Valenciana i al Ministeri de Treball del Govern d'Espanya.
3. Que es trasllade d'este acord a tots els Ajuntaments de la Província.

Conxa Garcia Ferrer.

**Diputada-Delegada d' Assessorament Municipal
Assistència, Defensa en Judici i de Plans d' Ocupació**

